Expediente 202300410-01
Tramite Violencia intrafamiliar (Segunda Instancia)
JUZGADO CUARTO DE FAMILIA
Armenia, Quindío, noviembre primero (1) de dos mil veintitrés (2023).

Procede el Despacho a resolver Recurso de Apelación de la Medida de Protección Definitiva por Violencia Intrafamiliar Acta de Diligencia del 28 de septiembre de 2023, promovido por JORGE MARIO BUSTAMANTE PARRA, en contra de la señora SANDRA LILIANA PARRA GOMEZ, dictada por la Comisaría Segunda de Familia de Armenia, previa la siguiente síntesis procesal.

ANTECEDENTES

El recurrente ante violencia física ejercida en su contra por la señora Sandra Liliana Parra Gómez, presenta denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con pruebas en dictamen de Medicina Legal y fotografías de las lesiones personales causadas por su progenitora, la cual fue remitida a la Comisaria Segunda de Familia, quedando plasmada en formato de apertura de historia de atención por violencia intrafamiliar de fecha 24 de julio hogaño, fijando audiencia de conciliación prevista en el artículo 7 de la Ley 575 del año 2000, para el 1 de agosto del presente año, misma que, no se realizó ese día porque el joven Jorge Mario solicitó su suspensión, toda vez que, no se encontraba apoyado por apoderado judicial, en tanto que, su señora madre asistió a la audiencia en compañía de un profesional del derecho.

Vista publica que se lleva a cabo el 8 de septiembre de 2023, en la que se incluye también como víctima, a su hermana Andrea Bustamante Parra, por ello se acumulan ambos trámites, pero, también fue suspendida para el 28 del mismo mes y año ante la posibilidad de conciliación.

El 28 de septiembre del año en curso, se realiza nuevamente audiencia entre las víctimas JORGE ANDRES Y ANDREA BUSTAMANTE PARRA y la señora SANDRA PARRA GOMEZ, la cual resulta fallida.

A continuación, la Comisaria Segunda de Familia se pronuncia sobre la violencia ordenando como medida definitiva de protección a favor de la señora Sandra Parra Gómez, ordena el desalojo de su hijo JORGE ANDRES BUSTAMANTE PARRA de la residencia, que tanto él como su hermana comparten con su progenitora.

Inconforme con la decisión JORGE ANDRES BUSTAMANTE PARRA, presenta recurso de apelación aduciendo que, no comparte la decisión de la Comisaria Segunda de Familia, porque considera que, se le ha vulnerado el debido proceso en las actuaciones administrativas por cuanto, no decretó ni solicitó pruebas, no fue oído en descargos, hizo caso omiso de su denuncia, y solo se ocupó de la acusación hecha en su contra por la contraparte.

Con oficio remisorio de fecha 04 de octubre de 2023, la Comisaria Segunda de Familia de Armenia, atendiendo lo contemplado en los incisos 2 y 3 del artículo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000 envía a los juzgados de familia, el recurso de Apelación presentado, el cual fue sometido a reparto y asignado a este despacho, profiriendo auto que admite, de fecha octubre nueve (9) de dos mil veintitrés (2023), ordenando notificar a las partes, al Ministerio Público y Defensora de Familia.

PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO

La Dra. Amanda Cristina Eraso López, en calidad de Procuradora 4 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las mujeres, se pronunció al respecto, solicitando dejar sin efecto la decisión adoptada el día 28 de septiembre de 2023 para que la Comisaría de Familia, surtidas las etapas correspondientes, de la oportunidad a los agresores de presentar y solicitar pruebas, así mismo a las víctimas, para después del decreto y práctica de pruebas se resuelva de fondo, respecto a la medida definitiva, mediando la motivación de la decisión y el análisis probatorio correspondiente.

Señala que, al verificar el expediente se evidencia que, la Comisaría Segunda de Familia admite la actuación de JORGE MARIO BUSTAMANTE PARRA el 24 de julio de 2023, sin emitir pronunciamiento respecto a la procedencia de una medida de protección provisional.

Posteriormente, cuando la presunta agresora señora SANDRA PARRA GOMEZ, pone de presente hechos de violencia por parte de su hijo, a favor de ella se emite una medida de protección provisional, acumula actuaciones, y procede a fijar la audiencia de descargos, de pruebas y fallo, priorizando la conciliación entre las partes, no obstante, PRETERMITIENDO la etapa de decreto y practica de pruebas.

Explica que, la autoridad administrativa no expone en su decisión los motivos para la adopción de la medida de protección definitiva a favor de la señora SANDRA LILIANA PARRA GOMEZ, y solo se limita a argumentar que, lo que la víctima desea es el desalojo de su hijo, presunto agresor de la residencia que comparten con su otra hija ANDREA BUSTAMANTE PARRA.

No menciona los medios de prueba que, tuvo en cuenta para concluir que, esa era la medida más adecuada para la víctima, y menos aún, analiza las pruebas que determinaron la decisión (amén que nunca fueron decretadas, ni practicadas y ni siquiera se dio oportunidad a las partes para que las solicitaran o presentaran).

Así mismo, no hay pronunciamiento respecto de los hechos de violencia que, había denunciado JORGE MARIO BUSTAMANTE PARRA, y porqué resultan más creíbles los hechos de violencia que denuncia la progenitora, si prácticamente, ambos acontecimientos se sustentan en la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, y en los informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que, indican que, efectivamente ambos, JORGE MARIO BUSTAMANTE PARRA Y SANDRA LILIANA PARRA GOMEZ, padecieron violencia física, por tanto, hacía necesario obtener mayores elementos de convicción para establecer a cuál de ellos se le brindaría la medida de protección.

Refiere que, las fases consagradas en los artículos 12, 13 y 14, ley 294 de 1996 ya enunciadas, fueron pretermitidas por la Comisaria, ya que, pese a que los agresores fueron citados a la audiencia a llevarse a cabo el día 28 de septiembre de 2023, por lo menos a JORGE MARIO BUSTAMANTE PARRA no se le dio oportunidad de presentar sus descargos, no se le permitió solicitar o presentar pruebas y en calidad de víctima tampoco tuvo la oportunidad de presentar o solicitar sus medios de prueba, o controvertir las presentadas o solicitadas por la agresora.

Se omitió también la etapa de decreto y práctica de pruebas. Igualmente, omitió permitir a la señora SANDRA LILIANA PARRA GOMEZ presentar descargos ante los hechos de violencia que denunció su hija ANDREA BUSTAMANTE PARRA en su contra, y por ende presentar o solicitar pruebas,

Más grave aún, en la decisión final, nada se dice sobre la medida de protección solicitada por la joven ANDREA, y es más, se la deja residiendo con su presunta agresora, cuando la hija había manifestado, al igual que lo hizo la madre, que ella consideraba que, era necesario proceder al desalojo de su progenitora

Dado lo anterior y atendiendo la causal 6 de nulidad del art. 133 del Código General del Proceso, pide dejar sin efecto la decisión adoptada el día 28 de septiembre de 2023 para que la Comisaría de Familia, surtidas las etapas correspondientes, de la oportunidad a los agresores de presentar y solicitar pruebas, así mismo a las víctimas, para después del decreto y práctica de pruebas se resuelva de fondo, respecto a la medida definitiva, mediando la motivación de la decisión y el análisis probatorio correspondiente.

CONSIDERACIONES

Marco jurídico (Competencia)

Teniendo en cuenta que se trata de un recurso de apelación contra una decisión administrativa emitida por una Comisaría de Familia del Distrito Armenia, y que a dicho acto procedimental se le aplican las reglas contenidas en el Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el Código General del Proceso normas que a continuación se citaran:

El Decreto 2591 de 1991 en cuanto a la impugnación del fallo de las decisiones administrativas de una medida de protección por violencia intrafamiliar establece lo siguiente:

“ARTICULO 31.- Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.

ARTICULO 32.- Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.

El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su (eventual) revisión.”*

Así mismo, el Código General del Proceso en cuanto al trámite de este medio establece lo siguiente:

“Apelación. Fines de la apelación. Art. 320.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

(...)

Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior.

Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada.

Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarará desierto el recurso de apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado.

Violencia Intrafamiliar

Ha sido definida por la Honorable Corte Constitucional en diversas oportunidades como:

“Todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica”.

Para evitar que se produzcan episodios de violencia dentro de los núcleos familiares que pueda afectar su entorno que en algunos de los casos está conformado por menores de edad, se creó la ley 294 de 1996, la cual ha sido objeto de múltiples modificaciones y regulaciones por parte de la ley 575 de 2000, decreto 652 de 2001, ley 1257 de 2008 y Decreto 4799 de 2011.

La Ley 575 del 2000, reformada por la ley 1257 de 2008, en su artículo 5º consagró además que el funcionario respectivo dictará, mediante providencia motivada, una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquiera otra similar, y que además podrá, en términos generales, ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación, o el de abstenerse de penetrar en cualquier lugar en donde se encuentre la víctima, o prohibirle esconder o trasladar de residencia a los niños, o personas discapacitadas, o imponerle la obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico, y si fuere necesario ordenarle el pago de los gastos médicos que requiera la víctima. Además, si la violencia o maltrato reviste mayor gravedad, podrá disponer la protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades y cualquiera otra para los propósitos de esta ley

En relación al tema objeto del recurso la Corte Constitucional en Sentencia T-145-17, indicó:

(..) Por lo anterior, la perspectiva de género, debe orientar siempre las actuaciones

de los operadores de justicia armonizando los principios constitucionales y la especial protección otorgada a la mujer, cuando es víctima de cualquier tipo de violencia o discriminación sin que ello conduzca a la pérdida de imparcialidad del juez, al desconocimiento del mandato de valorar el conjunto de pruebas recaudadas conforme a las reglas de la sana crítica y a omitir la presunción de inocencia predicable respecto del presunto agresor. Se trata de adoptar decisiones judiciales apoyadas en un marco normativo más amplio en materia de protección de derechos de los grupos más vulnerables a fin de que tengan un impacto visible y positivo en su vida y en general en la sociedad (...)

CASO CONCRETO

Descendiendo al asunto que nos ocupa, es evidente que, el joven JORGE MARIO BUSTAMANTE PARRA, presenta desacuerdo contra la decisión adoptada en Acta de Diligencia del 28 de septiembre de 2023, proferida por la Comisaria segunda de Familia de Armenia, la cual, ordena como medida definitiva de protección a favor de la señora Sandra Liliana Parra Gómez, el desalojo de su hijo JORGE BUSTAMANTE PARRA de la residencia, que tanto él como su hermana comparten con su progenitora, porque considera vulnerado el debido proceso, teniendo en cuenta que, no hubo fase probatoria, ni siquiera dio oportunidad a las partes para que las solicitaran o presentaran.

En efecto, expresamente el Art. 10 de la Ley 294 de 1996, establece: *“La petición de medida de protección deberá expresar con claridad los siguientes datos: a) Nombre de quien la presenta y su identificación, si fuere posible; b) Nombre de la persona o personas víctimas de la violencia intrafamiliar; c) Nombre y domicilio del agresor; d) Relato de los hechos denunciados, y e) **Solicitud de las pruebas que estime necesarias**”.*

El artículo 6o. de la Ley 575 de 2000 que reza.

“El Comisario o el Juez, según el caso, recibirá y avocará en forma inmediata la petición, y si estuviere fundada en al menos indicios leves, podrá dictar dentro de las cuatro (4) horas hábiles siguientes, medidas de protección en forma provisional tendientes a evitar la continuación de todo acto de violencia, agresión, maltrato, amenaza u ofensa contra la víctima, so pena de hacerse el agresor acreedor a las sanciones previstas en esta ley para el incumplimiento de las medidas de protección. (Subrayado por el despacho).

Ahora, una vez examinado el trámite administrado, puesto en consideración, se encuentra que, la autoridad de primera instancia, admite la actuación el 24 de julio hogaño, sin emitir pronunciamiento respecto a la procedencia de una medida de protección provisional;

Posteriormente cuando la presunta agresora señora SANDRA PARRA GOMEZ, pone de presente hechos de violencia por parte de su hijo, a favor de ella se emite una medida de protección provisional, acumula actuaciones, y procede a fijar la audiencia de descargos, de pruebas y fallo, priorizando la conciliación entre las partes, y, no obstante, PRETERMITIENDO la etapa de decreto y práctica de pruebas.

Luego en audiencia llevada a cabo entre las víctimas JORGE ANDRES Y ANDREA BUSTAMANTE PARRA y la señora SANDRA PARRA GOMEZ, la cual resultó fallida, la Comisaria Segunda de Familia, se pronuncia sobre la violencia intrafamiliar y ordena como medida definitiva de protección a favor de la señora

Sandra Parra Gómez el desalojo de su hijo JORGE ANDRES BUSTAMANTE PARRA de la residencia que tanto él, como su hermana comparten con su progenitora, sin exponer en tal decisión los motivos para la adopción de la medida, no menciona los medios de prueba que, tuvo en cuenta para concluir que esa era la medida más adecuada para la víctima, y menos aún, analiza las pruebas que la determinaron, toda vez que, nunca fueron decretadas, ni practicadas y ni siquiera se les dio oportunidad a las partes para que las solicitaran o presentaran.

Bajo este orden, constata esta judicatura, lo esbozado por el Ministerio Público, donde se evidencia que, la Comisaría de Familia, incurrió en varios errores, al omitir la etapa probatoria en la audiencia realizada el 28 de septiembre de 2023, al no darle la oportunidad, por lo menos al señor JORGE MARIO BUSTAMANTE PARRA de presentar sus descargos, solicitar o presentar pruebas, y en calidad de víctima tampoco tuvo la oportunidad de presentar o solicitar sus medios de prueba o controvertir las presentadas o solicitadas por la agresora. Es decir, se omitió en esta diligencia la etapa de decreto y práctica de pruebas.

Otra de las falencias encontradas es que, no hay pronunciamiento respecto de los hechos de violencia denunciados por JORGE MARIO BUSTAMANTE PARRA y al parecer resultan más creíbles los hechos de violencia, que denuncia la progenitora, si ambos acontecimientos se sustentan en la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y los informes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que indican que efectivamente ambos, padecieron violencia física, motivo por el cual se hacía necesario obtener mayores elementos de convicción, para establecer a cuál de ellos se le brindaría la medida de protección.

También, omitió la Comisaría de Familia permitir a la señora SANDRA LILIANA PARRA GOMEZ presentar descargos ante los hechos de violencia que, denunció su hija ANDREA BUSTAMANTE PARRA en su contra, y por ende presentar o solicitar pruebas. Más grave aún, en la decisión final nada se dice sobre la medida de protección solicitada por la joven ANDREA, y, es más, se la deja residiendo con su presunta agresora, cuando la hija había manifestado, al igual que lo hizo la madre, que ella consideraba que era necesario proceder al desalojo de su progenitora.

Así las cosas, por lo antes discurrido, encuentra el despacho que, le asiste razón al Ministerio Público, en cuanto a que, la decisión adoptada en Acta de Diligencia del 28 de septiembre de 2023, proferida por la Comisaría Segunda de Familia dentro del proceso por Violencia intrafamiliar, es violatoria del derecho procesal probatorio (debido proceso), por tanto, se dispondrá declarar la nulidad de lo actuado, a partir del Acta de Diligencia del 28 de septiembre de 2023 para que, la Comisaría de Familia, surtidas las etapas correspondientes, de la oportunidad a los agresores de presentar y solicitar pruebas, así mismo a las víctimas, y después del decreto y práctica de pruebas se resuelva de fondo, respecto a la medida definitiva, mediando la motivación de la decisión y el análisis probatorio correspondiente.

En suma, dentro de la Audiencia referida, donde se tomó la decisión estudiada, es perfectamente viable aplicar la causal de nulidad, señalada en el numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso, al no permitirle a los intervinientes solicitar o presentar pruebas, para que, con posterioridad, se analice y valore los medios allegados, para proferir en forma motivada, mediante Acta de diligencia medida de protección definitiva.

Finalmente, debe recordarse que, si bien es cierto la filosofía de la legislación en este tema, es por supuesto, la protección de la familia (Incluido el hombre), la mujer y los menores, no es menos cierto que, hay que direccionar las decisiones, bajo el principio de toda actuación administrativa y judicial, cual es, el consagrado en el artículo 29 de nuestra constitución nacional, tal como se anuncia, en la jurisprudencia constitucional traída a colación, líneas atrás.

DECISION

En conclusión, se ordenará la Nulidad procesal de las diligencias, realizadas por la Comisaria de origen, para que proceda a llamar a nueva audiencia, de acuerdo a lo dispuesto en las normas resaltadas por la Procuraduría, a fin de que se les dé la oportunidad a las partes de pedir y controvertir las pruebas, decretar las que se consideren pertinentes y útiles, para luego valoradas (Motivación) para finalmente tomar la decisión de carácter **definitivo**.

Por lo anterior, el Juez Cuarto de Familia de Armenia

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR NULIDAD PROCESAL, por tanto, DEVOLVER las presentes diligencias a la Comisaria Segunda de Familia de Armenia, con el fin de que proceda a llamar a nueva AUDIENCIA PUBLICA, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 294 de 1996, (modificada y regulada por la ley 575 de 2000, Decreto 652 de 2001, Ley 1257 de 2008 y Decreto 4799 de 2011), para que, se les permita a las partes, pedir y controvertir pruebas que consideren pertinentes, decretarlas, valorarlas, para finalmente tomar la decisión de carácter definitivo. Ello, en atención, a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

NOTIFÍQUESE,

FREDDY ARTURO GUERRA GARZÓN
JUEZ
lvc

Firmado Por:
Freddy Arturo Guerra Garzon
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 004 Oral

Armenia - Quindío

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0e07a1821f00c6025fdaad7e1f5baa8745c904015e07710ba95c0385d029f663**

Documento generado en 01/11/2023 05:44:44 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>